



## **CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE JUNÍN SALA CIVIL PERMANENTE DE HUANCAYO**

Jr. Parra del Riego No. 400 El Tambo-Huancayo  
Teléfono (064) 48-1490

Ss.  
Proaño Cueva  
**Orihuela Abregú**  
Lujan Zuasnabar

### **SENTENCIA DE VISTA N° 1009 - 2019**

Expediente N° 01932-2018-0-1501-JR-CI-06

**APELANTE** : MARTHA OSORIO HUÁNUCO  
**JUZGADO** : 6° JUZGADO CIVIL DE HUANCAYO  
**DEMANDANTE** : LUIS ISAIAS ARTEAGA CASTROMONTE  
**DEMANDADO** : MARTHA OSORIO HUATUCO  
**PROCESO** : SUMARÍSIMO  
**MATERIA** : DESALOJO

**GRADO** : **APELACION DE SENTENCIA**

**JUEZ PONENTE** : **ORIHUELA ABREGÚ**

#### **Resolución No. 15.-**

Huancayo, dieciséis de setiembre  
Del año dos mil diecinueve.

#### **VISTOS:**

##### **Materia del Grado**

Viene en grado de apelación la sentencia contenida en la resolución número nueve del dieciocho de junio del año dos mil diecinueve, por la que se declara fundada la tacha de documento por falsedad formulada por la demandante doña ISABEL MARCELINA RODRÍGUEZ POMA de BALBÍN contra la minuta de compraventa de fecha quince de junio del año dos mil cuatro que obra en el folio treinta y treinta vuelta, declarándose su ineficacia probatoria para el presente proceso; fundada la demanda interpuesta por doña ISABEL MARCELINA RODRIGUEZ POMA de BALBÍN contra doña MARTHA OSORIO

HUATUCO sobre desalojo por ocupante precario, con lo demás que contiene.

### Fundamentos de la Apelación

Los agravios contenidos en la apelación se pueden resumir en lo siguiente:

1. No existe disposición judicial alguna que haya declarado nulo o falso el documento tachado.
2. El recurrente sí cuenta con un título que justifica la posesión del bien sub litis.
3. La demandante no ostenta ninguna titularidad respecto al derecho de propiedad del bien sub litis.

### CONSIDERANDO

#### **CUESTION EN DISCUSIÓN**

Determinar si la sentencia en apelación debe ser confirmada, revocada o declarada nula.

#### **ANALISIS DE LA SALA SOBRE LA CUESTION EN DISCUSION**

1. ***Respecto a la tacha***, este instrumento procesal procede para cuestionar la eficacia de un documento ya sea por causa de la falsedad de éste o por la nulidad formal del documento, en concordancia con el artículo 242° del Código Procesal Civil que prescribe: ***“Si se declara fundada la tacha de un documento por haberse probado su falsedad, no tendrá eficacia probatoria”***, y sobre esto, la jurisprudencia nacional<sup>1</sup> ha indicado que: ***“...la sala superior al expedir la recurrida ha procedido conforme al marco jurídico aquí delimitado, por cuanto ha valorado de manera conjunta y razonada todos los medios probatorios, llegando a la conclusión de que al haberse concluido en un proceso penal, que los documentos que el demandante invoca como pruebas de su propiedad y de la simulación o fraude de los contratos que pretenden nulificar, han sido considerados como falsos y adulterados, no pueden ser considerados como prueba para amparar su pretensión; fundamento que se encuentra arreglado a lo dispuesto en el segundo párrafo del artículo 242 del CPC, según el cual “si en un proceso penal se***

---

<sup>1</sup> CAS. No. 5050-2011 citada en el Código Civil de LEGALES EDICIONES (2016), Pág. 562-563.

**establece la falsedad de un documento, éste carece de eficacia probatoria en cualquier proceso civil**” debiéndose agregar, que las alegaciones referidas a las edificaciones que habría realizado el demandante sobre el inmueble no son materia del presente proceso, más aún si ya han sido resueltas en el proceso que siguió el demandante contra su hermano demandado sobre obligación de dar suma de dinero...”, y en el caso presente, se puede advertir que en el folio tres del expediente penal que se adjunta<sup>2</sup> obra parte de la acusación formulada por la señora Fiscal Provincial LISBET MILAGRITOS ARANA CORTEZ, en la consta el hecho atribuido a la ahora apelante, indicando: “**...documentos presentados por Martha Osorio Huatuco para la solicitud de nuevo suministro eléctrico instalado en su vivienda, entre los cuales obra una minuta de compraventa de su inmueble ubicado en el Jr. Huayna Capac No. 073, sector 18, El Tambo, de fecha 15 de junio de 2004, que señala que vendió el inmueble a la investigada, documento que señala es falso, puesto que en la firma que se le atribuye...**”, luego en el acta de registro de audiencia de juicio oral del folio 46, aparece lo siguiente: “**...19:28 Juez da lectura a los derechos que tiene la acusada dentro del juicio, tal como se encuentra registrado en audio y video, se le pregunta a la acusada si es responsable de los hechos materia de acusación y de la reparación civil, respondiendo la ACUSADA que sí...**”, lo que evidencia que en el proceso penal se ha condenado a la ahora impugnante como autora del delito contra la fe pública en la modalidad de uso de documentos falsos, por ende en el proceso penal referido sí se ha llegado a determinar la falsedad del documento que en el presente proceso pretende hacer valer, para probar una presunta posesión justificada del predio sub litis. Entonces sí, se ha estimado la tacha por tratarse de un documento falso, aceptado como tal en un proceso penal con decisión firme, dicha aceptación tiene el valor probatorio de prueba asimilada, conforme al artículo 221° del Código Procesal Civil que prescribe: “**Las afirmaciones contenidas en actuaciones judiciales o escritos de las partes, se tienen como declaración de éstas, aunque el proceso sea declarado nulo...**”, por tanto, en el presente caso, estamos ante un documento falso [por la propia declaración de la ahora apelante], y por ende, no es necesario que se pruebe la declaración de

---

<sup>2</sup> Exp. No. 1681-2016 cuaderno de debate, correspondiente al segundo juzgado de investigación preparatoria.

nulidad del acto jurídico, puesto que el artículo 242° del Código Procesal Civil establece que la tachadura puede ser estimada, por causa de la falsedad del documento, y como consecuencia de ello, el Juzgado declara ineficaz el título de la demandada, quedando probada la inferencia legal establecida por el artículo 911° del Código Civil que prescribe: ***“La posesión precaria es la que se ejerce sin título alguno o cuando el que tenía ha fenecido”***, y en este caso, la demandada apelante, ha aceptado ser responsable penal por el uso de un documento falso constituido por la minuta de compraventa de fecha 15 de junio del año 2004 e incluso, habiendo sido condenada por causa del uso de dicho documento, pretende también usar el mismo, en el presente proceso. Por tales razones, resulta evidente que la parte impugnante no ha probado la existencia de agravios en este extremo del recurso, pues la decisión del Juez, el razonamiento y justificación, se hallan ajustados a ley.

2. ***Respecto al título del apelante***, conforme a lo indicado con anterioridad, la propia parte demandada en el proceso penal con decisión firme que se acompaña como prueba en la presente causa, aceptó que su título era falso, siendo incluso condenada como responsable del delito de uso de documento falso, por tal causa y, el artículo 242° de la Norma Procesal Civil, prevé los efectos de la declaración de fundabilidad de la tachadura por falsedad del documento, estableciendo que éste documento carece de eficacia probatoria en cualquier proceso civil. De igual modo, la doctrina nacional autorizada<sup>3</sup>, indica al respecto: ***“...significa que al declararse fundada la tachadura sobre dicho medio de prueba, este o puede ser valorado, no es eficaz como prueba y, por tanto, al no cumplir con la exigencia del artículo 200 del CPC debe desestimarse la controversia”***, por tanto si en el presente caso, como se ha indicado anteriormente, la tachadura ha sido amparada sin que la parte impugnante desvirtúe los fundamentos que justifican dicha decisión, entonces el título que pretende hacer valer o hacer uso, la demandada no puede ser valorado como prueba de una posesión legítima o justificada del bien sub litis, tal como lo ha considerado también el Juez de la demanda, implicando ello que tampoco, se ha probado la existencia de agravios en este extremo del recurso.
3. ***Respecto a la legitimidad para obrar de la demandante***, indica la parte apelante que el bien pertenece al cónyuge de la actora y como tal no tendría legitimidad para obrar. Al respecto

---

<sup>3</sup> LEDESMA NARVAEZ, Marianella. Comentarios al Código Procesal Civil T-I, Gaceta Jurídica (2012), Pág. 630.

se puede verificar que el artículo 310° del Código Civil establece: ***“...También tienen la calidad de bienes sociales los edificios construidos a costa del caudal social en suelo propio de uno de los cónyuges, abonándose a éste el valor del suelo al momento de reembolso”***, y la parte accionante en su escrito de postulación de la demanda del folio 21 indica: ***“...En dicho terreno la Sociedad Conyugal conformada por: la recurrente: Isabel Marcelina Rodríguez Poma de Balbín y, mi cónyuge: Javier Ismael Balbín Najarro hemos construido nuestra casa ubicada en el Jr. Huayna Cápac No. 071- 073 El Tambo...”***, y dicha afirmación no ha sido desvirtuada por la ahora parte apelante y, si la demanda está dirigida a recuperar el bien construido por la sociedad conyugal a la que pertenece la accionante, dicha persona sí estaría legitimada. Además en la audiencia única, el Juez de la causa ha resuelto este pedido mediante la excepción de falta de legitimidad, habiéndose declarado infundada la misma y, habiéndose interpuesto el recurso de apelación, la demandada no ha probado haber cumplido con el requerimiento contenido en la resolución número siete, la cual contiene el apercibimiento de rechazo y, si bien, el Juez no se ha pronunciado sobre el rechazo del recurso, incurriendo en un vicio procesal, también resulta evidente que ante el supuesto de declararse la nulidad de la sentencia con la única finalidad de pronunciarse respecto a dicha apelación, dicha decisión, definitivamente no influirá en el sentido de la decisión, puesto no existiendo medio probatorio alguno que demuestre que la ahora apelante haya cumplido con el pago de la tasa correspondiente, la resolución sólo rechazará el recurso, debiendo tenerse consentida la resolución número siete, que declaró infundada la excepción y, como tal no corresponde pronunciarse nuevamente al respecto, ya que la infundabilidad genera cosa juzgada, todo ello en concordancia con el artículo 172° del Código Procesal Civil que prescribe: ***“...No hay nulidad si la subsanación del vicio no ha de influir en el sentido de la resolución o en las consecuencias del acto procesal”***.

Por otro lado, y conforme antes se ha verificado la parte accionante afirma que el bien obtenido por su cónyuge mediante anticipo de legítima, era un terreno sobre el cual la sociedad conyugal ha efectuado la edificación que es lo que propiamente ocupa la parte demandada y, si es así, la demandante sí estaría legitimada para obrar, pues la apelante no ha probado lo contrario. Además que como ya se indicó existe una resolución no apelada conforme a ley, por la que dicha excepción fue declarada infundada. Por tanto, tampoco se advierte, en este

extremo, la existencia de agravios que pudieran permitir que el recurso sea estimado.

Por estas consideraciones, este Colegiado debe confirmar la resolución venida en grado.

### **DECISION**

**CONFIRMARON** la sentencia contenida en la resolución número nueve del dieciocho de junio del año dos mil diecinueve, por la que se declara fundada la tacha de documento por falsedad formulada por la demandante doña ISABEL MARCELINA RODRÍGUEZ POMA de BALBÍN contra la minuta de compraventa de fecha quince de junio del año dos mil cuatro que obra en el folio treinta y treinta vuelta, declarándose su ineficacia probatoria para el presente proceso; FUNDADA la demanda interpuesta por doña ISABEL MARCELINA RODRIGUEZ POMA de BALBÍN contra doña MARTHA OSORIO HUATUCO sobre desalojo por ocupante precario, con lo demás que contiene y, los devolvieron. **NOTIFIQUESE.-**